

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1494

28 de septiembre de 2026

Presentado por la señora *Álvarez Conde*

Referido a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial

LEY

Para enmendar los Artículos 2 y 13 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, a los fines de actualizar la política pública sobre el acceso a los servicios gubernamentales; añadir un nuevo Artículo 9-A a dicha Ley para crear la Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico y el establecimiento de un Protocolo Uniforme de Servicios Alternos coordinado centralmente por la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS); enmendar los Artículos 3 y 7 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”; disponer sobre el aprovechamiento de la infraestructura comunitaria ya existente y de fondos estatales y federales disponibles para estos propósitos; ordenar el desarrollo de programas de alfabetización digital dirigidos prioritariamente a las personas de edad avanzada; establecer mecanismos de financiamiento, medición y rendición de cuentas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La brecha digital se puede definir como la disociación de ciertos grupos, en ocasiones generaciones, respecto al acceso y la utilización de la tecnología. Este fenómeno es particularmente evidente en nuestra población de adultos mayores. Mientras que las personas más jóvenes o de edad media, habiéndose relacionado con un mundo digitalizado, no enfrentan muchos retos en el uso de la tecnología en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, aquellas personas de mayor edad, que se formaron

sin acceso a computadoras y teléfonos celulares, enfrentan grandes retos a la hora de usar el recurso tecnológico para cualquier tarea. Incluso, muchos se ven impedidos de realizar tareas relativamente sencillas pero indispensables en un mundo sumamente digitalizado, a menos que sean asistidos por terceros.

En años recientes, se han promulgado varias políticas públicas diseñadas con el propósito de integrar efectivamente la tecnología en la administración pública, particularmente en el ofrecimiento de servicios, tales como la Ley 75-2019, estableciendo el “Puerto Rico Innovation and Technology Service”, con el propósito de desarrollar la infraestructura tecnológica del gobierno; y la Ley 151-2004, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para incorporar la tecnología de información a través de la política pública. Sin embargo, a pesar de estas leyes, necesarias para lograr mayores eficiencias en la gerencia pública, algunos ciudadanos han expresado que ciertas agencias carecen de un ofrecimiento alternativo al tecnológico, resultando esto en un reto para aquellos que procuran servicios del gobierno y no cuentan con una computadora, acceso a internet o el dominio en el manejo de estos.

Esta Asamblea Legislativa había atendido previamente esta problemática mediante el P. del S. 347, radicado el 19 de febrero de 2025. No obstante, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico rindió, el 24 de septiembre de 2025, un Informe Negativo sobre dicha medida. Si bien la Comisión reconoció como loable el objetivo de garantizar la inclusión de las personas que no cuentan con recursos tecnológicos, concluyó que el mecanismo original —que ordenaba a cada agencia, individualmente y sin financiamiento asignado, diseñar su propio protocolo— podía generar redundancia normativa, falta de coordinación interagencial, fragmentación en la calidad de los servicios, y el riesgo de desincentivar los esfuerzos de digitalización ya en curso, incluyendo los Centros de Servicios Integrados de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Esta Asamblea Legislativa acoge las observaciones de la Comisión y presenta esta medida con un enfoque revisado que atiende, una a una, las preocupaciones señaladas

en el Informe Negativo, sin apartarse del propósito esencial de que ningún ciudadano quede excluido de los servicios gubernamentales por razón de la brecha digital. En lugar de un mandato disperso y sin fondos, esta Ley crea una estructura de coordinación central a cargo de PRITS, mediante un Protocolo Uniforme de Servicios Alternos aplicable a todas las agencias, y dispone que dicho Protocolo se nutra de la infraestructura comunitaria que ya existe, en vez de crearle duplicidad.

En el diseño de esta medida se han considerado las mejores prácticas identificadas por organizaciones dedicadas a la defensa de las personas de edad avanzada, entre ellas AARP, que mantiene oficinas en los cincuenta estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos y que ha abogado activamente ante gobiernos estatales sobre la equidad digital de las personas mayores de cincuenta años. La experiencia de AARP en otras jurisdicciones, incluyendo su colaboración en Puerto Rico para el uso de fondos federales en “centros de conectividad” ubicados en bibliotecas, centros comunitarios y edificios municipales, apunta a que las estrategias más efectivas combinan, al menos, cuatro elementos: (i) alianzas multisectoriales entre el gobierno, el sector privado de las telecomunicaciones y organizaciones sin fines de lucro; (ii) el aprovechamiento de espacios comunitarios ya existentes como puntos de acceso, asistencia y capacitación; (iii) programas de alfabetización digital dirigidos específicamente a las personas de mayor edad; y (iv) la canalización de fondos federales disponibles para estos propósitos, como los correspondientes a la Digital Equity Act y al programa de Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), de manera que las iniciativas no impongan cargas presupuestarias adicionales no atendidas a las agencias.

Esta Ley es cónsona, además, con la política pública de envejecimiento activo establecida en la Ley 121-2019, según enmendada, y con la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, que reconocen el derecho de este sector poblacional a participar plenamente en la vida social, económica y cívica del País.

Consideramos de suma importancia el establecimiento de políticas públicas que combatan las desigualdades sociales, incluyendo aquellas desventajas creadas por la

brecha digital que tanto afecta a nuestros adultos de mayor edad, mediante un mecanismo viable, coordinado y con fuentes de financiamiento identificadas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 75-2019, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 2. --- Declaración de Política Pública.

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico que las tecnologías de información y comunicación sean administradas de forma tal, que se alcance un nivel óptimo de eficiencia, se solucione el problema de integración entre las tecnologías de información y comunicación de las agencias gubernamentales, y se facilite así el intercambio de información, se fomente la transparencia en la información y la ejecución del Gobierno, se expanda la disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la interacción de nuestros habitantes con las tecnologías de información y comunicación, y se fomenten las iniciativas públicas y privadas que propendan a eliminar la brecha digital en nuestra sociedad. La política pública que se adopta y promulga es cónsona con el objetivo de lograr que la tecnología y el uso de ésta se inserte más en la cotidianidad de la vida de nuestros ciudadanos, *sin que represente una carga onerosa al momento de procurar los servicios gubernamentales, garantizando en todo momento el acceso equitativo a dichos servicios para las personas que no cuenten con los medios o el dominio del recurso tecnológico, mediante alternativas coordinadas centralmente y sustentadas en alianzas con el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la infraestructura comunitaria existente.* Además, es de vital importancia que se fomente el

desenvolvimiento de la industria de las tecnologías de información como un ente de desarrollo y crecimiento económico en el Gobierno de Puerto Rico. De tal forma, esta Ley crea un nuevo andamiaje de gobierno innovador, atemperando las exigencias del siglo XXI y capaz de valerse de la tecnología para cumplir con las expectativas de la ciudadanía y con los estándares modernos de gobernanza.”

Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 9-A a la Ley 75-2019, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 9-A. --- Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico; Protocolo Uniforme de Servicios Alternos.

(a) Se crea la Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico (en adelante, “la Alianza”), adscrita a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), como mecanismo permanente de coordinación multisectorial para el diseño, la implementación y la evaluación de las estrategias dirigidas a garantizar el acceso equitativo de la ciudadanía a los servicios gubernamentales, independientemente de si cuenta con los medios o el dominio del recurso tecnológico.

(b) La Alianza estará compuesta por: el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva de PRITS, o su representante, quien la presidirá; el Procurador o Procuradora de las Personas de Edad Avanzada; un representante del Departamento de Estado; un representante de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; hasta tres (3) representantes de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de las personas de edad avanzada o a la equidad digital, incluyendo, de estar disponible, un representante de AARP Puerto Rico; un representante de la industria de telecomunicaciones; un representante de la Federación de Alcaldes; y un representante de la

1 *Asociación de Alcaldes.*

2 (c) No más tarde de ciento ochenta (180) días luego de la aprobación de esta Ley, la
3 *Alianza recomendará a PRITS el contenido de un Protocolo Uniforme de Servicios Alternos (en*
4 *adelante, “el Protocolo”), aplicable a todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno de*
5 *Puerto Rico, que disponga, como mínimo: los servicios de asistencia presencial y telefónica que*
6 *toda agencia deberá ofrecer a las personas que no cuenten con acceso o dominio del recurso*
7 *tecnológico; los estándares mínimos de tiempo de espera y trato al ciudadano; el aprovechamiento*
8 *de la infraestructura ya existente, incluyendo los Centros de Servicios Integrados, las bibliotecas*
9 *públicas, los centros de personas de edad avanzada que operan al amparo de la Ley 121-2019,*
10 *según enmendada, y las oficinas municipales, como puntos de acceso, orientación y asistencia; y*
11 *las fuentes de financiamiento disponibles para su implementación, incluyendo fondos estatales y*
12 *fondos federales destinados a la equidad digital.*

13 (d) PRITS adoptará el Protocolo mediante reglamento, y todas las agencias deberán
14 *implementarlo. No se requerirá, ni se autorizará, la creación de protocolos individuales*
15 *adicionales por agencia para atender la misma necesidad, a fin de evitar duplicidad normativa y*
16 *la fragmentación de los servicios.*

17 (e) PRITS identificará y procurará activamente fondos federales disponibles para el
18 *financiamiento del Protocolo y de los programas de alfabetización digital dispuestos en esta Ley,*
19 *incluyendo, sin que se entienda como una limitación, fondos bajo la Digital Equity Act y el*
20 *programa de Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), e incluirá en su petición*
21 *presupuestaria anual ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto una partida específica para estos*
22 *propósitos, de manera que la implementación del Protocolo no constituya un mandato sin*

1 *financiamiento.*

2 (f) PRITS, en coordinación con la Alianza, la Procuraduría de las Personas de Edad
3 Avanzada y organizaciones sin fines de lucro, desarrollará e implementará programas de
4 alfabetización digital dirigidos prioritariamente a las personas de edad avanzada, utilizando los
5 espacios comunitarios señalados en el inciso (c) de este Artículo.

6 (g) PRITS recopilará anualmente datos sobre el acceso y el uso de la tecnología por parte
7 de la población de edad avanzada en Puerto Rico, pudiendo utilizar, entre otras, la Encuesta
8 sobre la Comunidad de Puerto Rico (American Community Survey) del Negociado del Censo
9 federal, y someterá a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre el progreso en la
10 implementación del Protocolo y de los programas de alfabetización digital.”

11 Sección 3.- Se enmienda el inciso (f) del Artículo 13 de la Ley 75-2019, según
12 enmendada, para que lea como sigue:

13 “Artículo 12. --- Deberes y Responsabilidades de las Agencias.

14 Para cumplir cabalmente con los objetivos y la política pública establecida en esta
15 Ley, las agencias tendrán que cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades:

16 (a) ...

17 ...

18 (f) Considerar el impacto del desarrollo de servicios electrónicos en personas que no
19 tienen acceso a Internet y llevar a cabo los esfuerzos necesarios, mediante programas y
20 alianzas con el sector privado y con organizaciones sin fines de lucro, para asegurar que
21 todos los sectores de la sociedad logren acceso a los servicios del Gobierno por canales
22 telemáticos. Adoptar e implementar el Protocolo Uniforme de Servicios Alternos aprobado por

la Puerto Rico Innovation and Technology Service conforme al Artículo 9-A de esta Ley, para brindar los servicios gubernamentales a aquellas personas que no tienen los medios o no dominan el recurso tecnológico.

(g) ...”

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 151-2004, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 3. - Política Pública.

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adopta como política pública la incorporación de las tecnologías de información a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la obtención de logros y que fomente activamente la innovación. *El Gobierno garantizará que los ciudadanos reciban los servicios gubernamentales independientemente de si cuentan con los medios o el dominio del recurso tecnológico, mediante el Protocolo Uniforme de Servicios Alternos establecido conforme al Artículo 9-A de la Ley 75-2019, según enmendada.*”

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 151-2004, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 7. - Deberes de las Agencias.

Con relación a la consecución de los propósitos de esta Ley, los Jefes de agencias e instrumentalidades tendrán los siguientes deberes:

(a) ...

...

(f) Considerar el impacto del desarrollo de estos servicios en personas que no tienen acceso a Internet y llevar a cabo los esfuerzos necesarios, mediante programas y alianzas con el sector privado y con organizaciones sin fines de lucro, para asegurar que todos los sectores de la sociedad logren acceso a los mismos. *Adoptar e implementar el Protocolo Uniforme de Servicios Alternos aprobado por la Puerto Rico Innovation and Technology Service conforme al Artículo 9-A de la Ley 75-2019, según enmendada, para brindar los servicios gubernamentales a aquellas personas que no tienen los medios o no dominan el recurso tecnológico.*

(g) ...”

Sección 6.- Reglamentación.

No más tarde de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Ley, la Puerto Rico Innovation and Technology Service, en coordinación con la Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico, deberá adoptar el Protocolo Uniforme de Servicios Alternos y promulgar la reglamentación necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

Sección 7.- Separabilidad.

Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Sección 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.